

nació como otras de su mismo carácter, «para llegar a donde no llegue la iniciativa privada», o lo que es lo mismo a sectores no atractivos para el capital privado.

Teruel, a través de Zaragoza y Huesca, queda así unido a Francia y con ello, toda la región vertebrada entre sí ferroviariamente. Podría ser ésta, además, una importante vía de transporte de mercancías con Francia, de acceso turístico al Pirineo, etcétera. Todo esto, claro está, siempre que se procediera a su actualización (electrificación, etc.) y apertura del túnel.

Presidentes de las tres Diputaciones aragonesas, alcaldes, diputados, algún procurador en Cortes..., en el primer vagón y único primera clase de las once unidades que se habían enganchado al «Canfranero», que inició pensadamente la marcha hasta su destino, el corazón del Pirineo aragonés. Objetivo: llegar hasta el mismo túnel del Somport. «Obra que unos hombres hicieron y otros hombres han abandonado», en expresión de Juan Lacasa, ex alcalde de Jaca. En los diez vagones posteriores, una heterogénea mezcla: señoras con bolsos de comida, trabajadores, jóvenes de melena, profesionales, niños... Durante el trayecto se vendieron ediciones especiales de la prensa de Zaragoza. En Ayerbe, la máquina estropeada, exigió el relevo; en la espera, los viajeros fueron obsequiados con vino y «tortas». Allí también cambió el «tono» de Radio Aragón en Marcha, que durante el trayecto anterior y por unos altavoces instalados a lo largo del tren, estuvo entrevistando a grupos de viajeros —por cierto, el primer interrogado fue Miguel Ángel Zamora, uno de los encartados en el proceso 1.001—. A partir de Ayerbe, y hasta el final del trayecto, se acabaron las canciones de Labordeta y Paco Ibáñez, y las entrevistas se limitaron a las autoridades y personas del primer vagón. El tren tenía anunciada su llegada a Canfranc a las doce del mediodía, haciéndolo a las tres de la tarde, donde le aguardaban varios autobuses franceses a burridos y cansados ya por la espera. Parecía como si el tren contestara con huelga de trabajo lento al olvido que ha recibido durante tantos años. A la entrada al túnel de Somport se descendió del tren, donde el alcalde de Canfranc dio la bienvenida, y quiso relegar, dada la hora, «los discursos para después de comer». Tras una discusión intra-autoridades, el presidente del SIPA lanzó un pequeño discursito, descubriendo una placa a la entrada del túnel, tras lo cual envió a todos a comer, prometiendo que a las cinco comenzaría «el acto político».

En la comida, unas azafatas repartieron un folleto editado por el SIPA, que había sido retirado el día de la visita del ministro de Obras Públicas al Pabellón de Aragón en la Feria del Campo de Madrid. El presidente de la Diputación de Teruel, al esquivar un «taponazo» de champán, se cayó de la silla, rompiéndose el brazo; anécdota esta que sería empleada repetidas veces por

los oradores, para establecer simbolismos muy al caso, entre el presidente y Teruel —máximo exponente de la pobreza y depresión en Aragón—. «Teruel difícilmente podría arrimar el hombro». El buen menú y el cariñena de la comida parece ser que hicieron efecto, pues motivaron que los comensales no se movieran, teniéndose que realizar el «acto político» en el comedor de la estación, y obligando a que la mayor parte de la gente quedara fuera.

En las intervenciones hubo de todo, en medio de aplausos indiscriminados y vivas a Aragón: la economía, la sensatez, el regionalismo romántico, la reivindicación regional, el folklore, «la fraternidad con Europa»,... todo mezclado.

Hemos tenido la experiencia en bastantes pueblos, de ver cómo jóvenes y maduros campesinos plantean cuestiones como:

¿Por qué esta región va a ser desheredada en el reparto del agua? ¿Por qué los beneficiarios de nuestras fuentes energéticas han de ser nuestros vecinos ricos? ¿Por qué va a ser «inundada» la cuenca de centrales nucleares? ¿Por qué existe en nuestro propio suelo una de las más importantes bases militares americanas? ¿Por qué los pueblos cada vez quedan más vacíos, cuando no llegan a desaparecer? ¿Por qué los recursos financieros se escapan hacia otras regiones privilegiadas sin revertir aquí?... Demasiados porqués para no cambiar la conciencia de un pueblo.

No extrañe, pues, a ningún espectador ajeno a Aragón, ver cómo paulatinamente, actos colectivos de todo tipo se suceden en esta tierra: ayer, la ribera del Bajo Cinca se opone a la construcción de la central nuclear de Chalamera; hoy, el Canfranc...; mañana, el tren de Torroja y el Trasvase...

Por una vez, el único título necesario para participar en la marcha a Canfranc ha sido el ser aragonés. Esto es hoy un hecho importante, ya que hasta ahora iba por delante el «carnet oficial», para estar en no importa qué manifestación pública legal y más dado que la entidad que lo ha convocado: el SIPA, organismo oficioso y representativo de una parte de la todavía timorata burguesía liberal aragonesa. Autoridades locales y representantes de organismos oficiales, monopolizando la dirección de un acto, como temiendo ser desbordados por las voces —¡Aragón! ¡Aragón!— de la heterogénea segunda clase, tal vez dispuesta a ir más allá de lo que sería deseable.

Una contradicción aparece evidente, ¿cómo los representantes de la Administración van a dar opciones diferentes a las que da el Poder Central para Aragón?... Y si esto es así, ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar?

Pese a todo, lo que nadie pone en duda es la justicia de la reivindicación y su necesidad para la región; así como la participación masiva —aproximadamente, mil ochocientas personas.

Valorar esta convocatoria como

punto histórico de partida y confluencia, puede no ser excesivo, sin que signifique halago para nadie, pero eso sí, en nuestra opinión viene a reflejar lo que sucede a lo ancho de nuestra Patria: la «derecha civilizada» se apunta al tren de Canfranc o al que oportunamente se ponga a andar. Tren regional, pues, que abandonado hasta hoy en vía muerta va saliendo de ella, y lo hará con tanta más fuerza cuanto

## ENSEÑANZA MEDIA

# Los opositores dicen basta

● Unas oposiciones han precisado la presencia de la Policía para preservar el «orden académico», costando masivamente por los cientos de opositores que durante estos días se concentran en Madrid. Desde que el día 3 de junio, en que los 1.400 aspirantes a las 60 plazas de agregado en las disciplinas de Geografía e Historia (inicialmente eran 2.800) decidieron boicotear los exámenes, debido al cúmulo de irregularidades cometidas en éstos, la actitud de boicot ha venido generalizándose al resto de las asignaturas cuyas plazas se ponían a concurso. En Filosofía (634 opositores para 30 plazas) se han aplazado los exámenes; en Francés (817 opositores para 20 plazas) tienen que ser suspendidos igualmente los exámenes ante las protestas de los aspirantes; en Lengua (2.000 matriculados para 40 plazas a concurso) se produjo un pateo general que obligó a la suspensión... Todos estos hechos han aparecido sucintamente en la prensa de los últimos días, siendo del dominio público, evitándonos hacer una relación exhaustiva.

Es interesante, sin embargo, detenerse en el boicot del día 3, origen del resto de la cadena, por las características específicas que reviste. Durante la primera parte del ejercicio (éste se encontraba dividido en dos: teórica y práctica), los opositores se vieron desagradablemente sorprendidos por las deficientes condiciones en que se desarrollaba el examen: hacinamiento, falta de tiempo, irregularidades en el reparto del material, falta de identificación de los opositores, realización de numerosos exámenes fuera del aula y un larguísimo etcétera de anomalías. Por otra parte, el tipo del examen recordaba más, según los opositores, a un concurso televisivo de «Cesta y puntos» que a una valoración seria y científica de los conocimientos de un profesional de la enseñanza: mapas en los que se debían señalar multitud de preguntas fútiles y secundarias, preguntas con «trampas» infantiles, etc., que configuraban toda una concepción memorística y rutinaria del conocimiento de una especialidad concreta. Todo esto lleva a los opositores, en forma espontánea, a reunirse en Asamblea antes de iniciar la segunda par-

te del ejercicio y decidir con unanimidad absoluta la impugnación del examen y la decisión de no continuar hasta que la Asamblea no llegara a una resolución conjunta. Es el primer paso hacia el boicot, que toma forma definitiva durante el posterior desarrollo de la Asamblea. Resulta importante destacar que el acuerdo adoptado en esta Asamblea, calificada como «histórica» por los mismos asistentes, y ratificado en la práctica durante los exámenes convocados en los doce distritos, elegidos democráticamente, hace entrega al director general de Ordenación Educativa de un escrito en el que se analiza el carácter irracional del sistema de oposiciones en torno a los siguientes puntos:

En esta perspectiva de aproximación son definitorias las palabras del presidente de la Diputación de Zaragoza en Radio Aragón en Marcha: «Este es un tren en el que sólo hay compartimientos, y no categorías». ■ SEMINARIO DE ESTUDIOS ARAGONESES.

1. No atiende a las necesidades educativas del Estado español.

2. Deja en situación de inseguridad, paro o desempleo a la mayoría absoluta de los licenciados.

3. Divide y enfrenta a los enseñantes en diferentes categorías dentro de la misma profesión.

4. No prueba ni la formación ni la capacidad pedagógica de los enseñantes.

Junto con estos puntos de divergencia con el actual sistema de oposiciones, los enseñantes allí reunidos formulaban una serie de puntos reivindicativos básicos, resumidos en los siguientes:

1. Escolarización total de la población hasta los dieciséis años.
2. Puestos de trabajo para todos los licenciados.
3. Contrato laboral.
4. Cuerpo único de enseñantes.

El fenómeno que se está produciendo en estos momentos hunde sus raíces en la situación gravemente deteriorada de la enseñanza en general. Situación caracterizada por un altísimo grado de falta de plazas escolares o en ese 25 por

ciento de paro de titulados superiores dedicados a la enseñanza precisamente en un país que cuenta con uno de los porcentajes más bajos de Europa en este sector concreto. Junto con esto, la inestabilidad en el trabajo, concretada en la falta de contrato laboral; la división en sectores y categorías artificiales, contra la que se pide la creación de un cuerpo único de enseñantes; la marginación del profesorado de los puestos de decisión en los centros, únicamente solucionable mediante Claustros democráticos formados por profesores, padres y alumnos,

etcétera. Frente a esta situación, la Administración propone un «Plan Quinquenal» con que resolver definitivamente el problema de las plazas del profesorado. Sin embargo, en la realidad, ocurre que para 1978, fecha de finalización del Plan, el 66 por 100 del profesorado seguirá siendo no numerario (actualmente esta cifra alcanza al 75 por 100). La misma desproporción entre las plazas puestas a concurso, 892, y el número de aspirantes, cifrado en 15.000, refleja las carencias de estas previsiones. ■ JAVIER ECHE-NAGUSIA,

## PERIODISTAS

# Tribulaciones y protestas

● A finales de la pasada semana, un grupo de periodistas de distintos medios de Barcelona hacían entrega al delegado del Ministerio de Información y Turismo de un escrito, firmado por un centenar y medio de periodistas, donde se exponían «las graves y crecientes dificultades y riesgos con que hemos de enfrentarnos quienes profesionalmente asumimos la responsabilidad de servir a la opinión pública, informando veraz y críticamente de la realidad del Estado español».

La carta, que, al parecer, está siendo firmada por periodistas de toda España, contabilizaba los «atentados al derecho a la libre informa-

ción y a la libertad de expresión» que se habían producido en los últimos seis meses: «un periodista ha sido expulsado del país, cuatro periodistas han pasado a prisión, otros ocho periodistas han sido detenidos, dos publicaciones han sido cerradas, dieciséis periodistas se encuentran procesados, cuarenta y ocho periodistas han sido llamados a declarar ante los Tribunales de Justicia, treinta y tres publicaciones han sido secuestradas..., once periodistas han sido despedidos... y se han abierto diez expedientes contra publicaciones y periodistas. Por último, se han producido amenazas de atentados por parte de

grupos de extrema derecha al menos en once ocasiones». Y consideraba urgente la adopción de una serie de medidas para proteger el «ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de los lectores a la información».

Que la situación descrita por este texto no ha mejorado en las últimas semanas, lo atestiguaba un editorial del diario «Informaciones» en defensa de «este periódico» y en el de «todos los que se limitan al duro oficio de dar informaciones», justificado por «una concatenación de "problemas", cuya cadencia empieza a resultar preocupante», que «nos obliga a soslayar todo pudor para explicar lo que pretende este periódico».

Los «problemas» no especificados a que se refería el diario madrileño podrían abarcar, al parecer, desde un expediente administrativo incoado hace unos meses por la noticia sobre la muerte de un policía en el País Vasco, posteriormente sobreesido, y estar enlazados con una serie de rectificaciones hechas por el propio periódico a algunas noticias, la última de las cuales ha sido la de un «policia español condenado en Francia», que, según un mentís posterior, «no era un policia».

Siguiendo en la línea de dificultades de los periodistas, el director de la revista «Doblón», José Antonio Martínez Soler, y Santiago Lomillo, redactor de «Nuevo Diario», prestaban declaración ante el Tribunal de Ética Profesional —cuya desaparición ha sido pedida repetidamente por los profesionales de la información— dentro de la serie de querrelas y denuncias formuladas por el procurador en Cortes y presidente del Grupo Nacional de Panaderías, señor Pérez Pillado. Pero inmediatamente, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid dirigió un escrito al ministro de Información y Turismo protestando por esta declaración ante el Tribunal de Ética Profesional y solidarizándose con los periodistas porque «estamos en el deber de prestar nuestro apoyo a quienes, cumpliendo con un deber profesional y ciudadano, informan objetivamente de las posiciones de los vecinos y de los hechos que éstos denuncian».

Por estas mismas fechas se celebraba en la Magistratura de Trabajo Número 3 de Madrid la visita de la demanda por despido, presentada por dos redactores de la agencia Pyresa. La numerosa asistencia de periodistas denotaba la excepción despertada por un caso que, al margen de la vía judicial, había ocupado muchas columnas de periódicos y revistas, concluyendo con una moción de censura contra el director de la agencia, votada mayoritariamente en la última Junta General de la Asociación de la Prensa de Madrid, y con una carta dirigida a este director y firmada por casi cincuenta periodistas de Madrid, donde se solicitaba «la inmediata readmisión de los compañeros Soledad Gallego y Bonifacio de la Cuadra».

También relacionado claramente con el tema, el diario «Arriba» había publicado un editorial, donde se llegaba al extremo de acusar a la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid y a su presidente de «debilidad manifiesta», para criticar luego a la Comisión de Defensa de la Profesión y a la propia Junta General celebrada recientemente. Y provocaba así una réplica del presidente de la Comisión de Defensa y vocal de la Junta Directiva, Fernando Castelló, que hasta el momento de cerrar estas páginas, aún no ha sido publicada por «Arriba».

En el juicio ante Magistratura, aparte de las alegaciones formales por una y otra parte, que hacían que los abogados de los demandantes solicitaran nulidad del despido y que la empresa pidiera que la demanda no fuera admitida, el debate se centró en si los minutos de trabajo en silencio, que habían efectuado los despedidos y otros muchos redactores de Pyresa el día 16 del pasado mes de mayo, eran o no causa de despido.

El silencio, que se correspondió entonces con paros y minutos de silencio en numerosos medios informativos de Madrid como protesta por las numerosas medidas administrativas o judiciales tomadas contra periodistas, no había interrumpido en ningún momento el trabajo normal, según los despedidos y varios compañeros suyos que testificaron a su favor. En tanto que, según la empresa, se alteró la producción y no se contestó a las llamadas telefónicas de la agencia. Extremo que el único testigo de la empresa, el subdirector, Fernando Latorre, no pudo asegurar.

A la espera de la sentencia de la Magistratura, los periodistas tenían otro motivo de inquietud en la difícil situación de los redactores de «Nuevo Diario», donde tras la dimisión del presidente y del director, corrían los rumores más dispares sobre el futuro. Frente a la sensación de que todo podía ser posible, frente a la falta de información de una crisis, que igual podía ser económica que constituir un episodio más de la lucha por la hegemonía de los distintos grupos (ver TRIUNFO, número 646, sobre la historia de «ND» y la crisis de enero), todos los trabajadores lanzaban una declaración pública:

«Los trabajadores de Prensa Económica, S. A., han sido siempre conscientes de la inviabilidad de "Nuevo Diario"... tal y como la empresa ha venido planteando hasta ahora la edición...». Y añadían que lo habían manifestado repetidamente, pero que sus puntos de vista no habían sido tenidos en cuenta. Que su actuación estaba siempre inspirada en el deseo de salvaguardar «ND» y «Desarrollo», manifestando su deseo «de participar activamente en la programación del futuro» de ambas publicaciones. Apoyaban, pues, cualquier plan que «tenga en cuenta estas aspiraciones» y se mostraban «irrevocablemente decididos a protagonizar la consolidación definitiva de estas publicaciones». ■ ENRIQUE BUSTAMANTE.

